

RECENSIONES

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO: *Actas del Consejo de Ministros*, Fernando VII, tomo I (1824 y 1825), tomo II (1826 y 1927), Madrid, 1989.

La desaparición, en un incendio accidental, del Primer Archivo Central de la Administración fue una pérdida de la que la historiografía decimonónica jamás podrá reponerse. Por razones que sólo cabe imaginar, los archivos del Ministerio de Hacienda o el de la Guerra no fueron trasladados, pero el primero sufrió los efectos de una evacuación apresurada, que nos ha dejado sobre todo expedientes de personal, que alguien consideró especialmente valiosos: en tanto que del segundo sólo podemos hacernos una idea de sus dimensiones, dadas las restricciones que hay para su utilización. Esta breve enumeración de las dificultades que encontramos los estudiosos del siglo XIX para renovar la imagen historiográfica recibida resulta pertinente cuando tenemos la ocasión de felicitarnos por la publicación de los primeros volúmenes de las *Actas de los Consejos de Ministros*. La edición de las Actas es una iniciativa de Enrique Moral, director general de Servicios del Ministerio, cuyo interés por la conservación del patrimonio cultural había tenido un notable éxito con ocasión del traslado de la Hemeroteca Municipal de Madrid, la más importante colección hemerográfica con que contamos en España. La responsabilidad de la edición corre a cargo de María del Carmen Salas Larrazábal y Concepción Contel Barea, que han dirigido sucesivamente el Archivo de la Presidencia, en donde se conservan la colección compuesta por 16 volúmenes de actas y 22 legajos de documentación complementaria.

El interés y el cuidado con que han realizado su trabajo han producido una edición muy cuidada en la que se han respetado todas las peculiaridades del original manuscrito y se le ha dotado de un índice de nombres y materias de una abundancia poco usual, en un momento en que muchos autores eluden un trabajo tan penoso como útil para los lectores. El prólogo de Enrique Moral cumple con el trabajo de informar al lector acerca del contenido de la colección, y lo hace mucho mejor que lo hacen estas breves páginas, como podrá comprobar quien lea ambos textos.

La serie que conserva el Archivo de la Presidencia del Gobierno no es completa, aunque lo mucho que falta se debe a que no siempre se recogió por escrito la noticia de lo que se decía en los Consejos. De las actas escritas por los secretarios del Consejo hay muchas que se han perdido, aunque pueda esperarse que la publicación de las conservadas permita la identificación de fondos que puedan estar hoy olvidados. La reciente recuperación de las actas del Directorio Civil de Primo de Ribera permite albergar todas las esperanzas. Las actas conservadas, y de las que se han publicado los dos primeros volúmenes, corresponden a cinco momentos distintos, sin que los acontecimientos políticos ofrezcan motivo suficiente para la interrupción. La gestión del Consejo está documentada durante la década absolutista y los primeros años del reinado de Isabel II, hasta octubre de 1838. Es la parte más abundante de la serie, dado que a ella corresponden más de la mitad de los volúmenes, en tanto las actas de 1844 y 1855 no completan un año. En último término, las del Directorio Civil de Primo de Ribera están completas y ocuparán los cuatro últimos volúmenes de la serie.

La sustitución de los secretarios de Estado y del Despacho, que entendían en todo tipo de asuntos, por ministros especializados en áreas determinadas del Gobierno, originariamente las de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina y Hacienda, se produjo con ocasión de la llegada de los Borbones al trono español. Los cinco Ministerios primitivos han conservado su identidad, aunque han cedido en una u otra ocasión parte de sus competencias para dar origen a nuevos ministerios. Las consecuencias políticas del cambio institucional fueron decisivas, y la mejor medida de su éxito está en la permanencia de la institución. Aunque durante un siglo y más usaron su primitivo título, su actividad se ajusta por completo a las de los Ministerios actuales. En el siglo XVIII, el Rey despachaba todas las semanas con cada uno de ellos, lo que obligaba a los ministros a acompañarle en sus desplazamientos estacionales por los Reales Sitios. Carlos III levantó un palacio para alojar, con la necesaria dignidad, al secretario de Estado, el que se conoció como Casa de los Ministros (de Estado) o palacio Grimaldi, y que ha tenido muy distintos inquilinos antes de convertirse en la sede del Centro de Estudios Constitucionales.

Al no formar Consejo ni reunirse los ministros para concertar sus puntos de vista, el Rey era la única persona que podía marcar una línea de acción a sus colaboradores. Recibía las informaciones de todos ellos, entre ellas las del estado de la Hacienda, y sólo él estaba en condiciones de decidir acerca de la conveniencia de una determinada política. El procedimiento se nos antoja hoy sorprendente, pero se mantuvo durante un siglo, sin más interrupción que la efímera Junta Suprema de Estado, que creó Carlos III cuando

tomó conciencia de que no podía seguir en el desempeño de esta función. La presidencia de la Junta correspondió al secretario de Estado, el conde de Floridablanca, quien ofreció a sus colegas, en una famosa *Instrucción reservada*, una panorámica de los problemas del país y una panorámica de los objetivos de la política ministerial. Entre 1792 y 1824 funcionó, de acuerdo con las circunstancias, un *Consejo de Estado*, demasiado numeroso para ser un órgano ejecutivo y corto para un legislativo. En él, los ministros se veían sometidos a examen y crítica, lo que en vez de mejorar su gestión les llevaba a eludir las responsabilidades. En noviembre de 1823, Fernando VII creó el Consejo de Ministros, que adquiere, a partir de este momento, su definitivo perfil de supremo órgano del poder ejecutivo. Durante un tiempo, el Consejo y los Ministerios estuvieron alojados en el Palacio Real, y aunque un buen día Fernando VII sorprendió a sus ministros con la noticia de un urgente deshaucio, no es seguro que la medida se llevara a efecto, entre otras razones, por la falta de locales donde colocar las oficinas ministeriales.

Las sesiones del Consejo no se celebraban con regularidad, aunque en un momento se dispuso que hubiese dos por semana. El nombramiento de un secretario del Consejo de Ministros responde no sólo al interés por recordar lo tratado en las sesiones, sino a la necesidad de contar con un testimonio preciso de las medidas que se había decidido poner en vigor. El secretario, cumplió su oficio, al menos en estos primeros años, con mayor rigor del que fue habitual años más tarde, y aún hoy, en que las intervenciones más interesantes son aquellas que van precedidas de una recomendación para que no figuren en acta, precaución que arruina el interés por la lectura de tantas actas de instituciones públicas y privadas. El desarrollo de las sesiones no obedecía a ninguna regla ni tampoco se aprecia ningún orden de las intervenciones. Como es natural, más que de definir una política se trata de asuntos del momento, en particular, de los asuntos relativos al orden público en su sentido más amplio, circunstancia que revela hasta qué punto era sensible el Consejo a los rumores o a las noticias, en ocasiones fantásticas, que por uno u otro medio llegaban a manos de uno u otro de los ministros. Las diferentes noticias y cuestiones se comunican, comentan y en su caso conducen a propuestas que se elevan al Rey, que habitualmente no concurre a las sesiones, a pesar de que se había reservado la Presidencia del Consejo, posiblemente como un medio de asegurar su independencia. La debilidad del Gobierno se hace manifiesta en todos los momentos y con ocasión de todo tipo de asuntos. Cuando se pide un subsidio temporal a las Provincias Vascongadas, al que las Diputaciones no responden, el Gobierno sugiere el envío de tropas, que su comandante reúne a los diputados generales en Burgos y conseguir así la realización del servicio. Fernando VII ignora la proposición,

y el asunto queda sobre la mesa como un contencioso sin solución. Los problemas financieros eran tan graves como para no poder atender los gastos presupuestados, situación en la que, de no hacerlo el Rey personalmente, es el Consejo quien dispone qué pagos han de realizarse. El dinero del empréstito real aparece a los ojos de los ministros como la solución de sus necesidades, a pesar de su cortedad. En estas condiciones, al Gobierno le resulta poco menos que imposible encontrar respuestas a las iniciativas de actores interiores y exteriores.

La represión contra los liberales había sido confiada a comisiones militares, y las actas nos descubren que el Consejo de Castilla condenó el procedimiento y requirió al de ministros en varias ocasiones para que pusiese fin a una práctica que desacreditaba a las instituciones judiciales. Los obispos, por su parte, no estaban conformes con la extinción de la Inquisición y organizaron sus propios Tribunales de la Fe, iniciativa que encontró la decidida oposición del Consejo de Ministros, que ordenó fuesen disueltos de inmediato. La amnistía que Fernando VII había anunciado después que recuperó su libertad de acción era un tema que preocupaba al Gobierno, sometido al conflicto entre sus ideas y la presión a que le supeditan los embajadores de las potencias aliadas, a los que fue sometido el texto del decreto. El Ejército francés, que, a petición del Rey, ocupaba un cierto número de plazas fuertes, mostró, como era sabido, un profundo desacuerdo con la política represiva, llegando en ocasiones a prohibir la ejecución de las sentencias contra liberales condenados por los tribunales españoles. Las actas nos ofrecen una viva imagen de las dificultades que estas intervenciones producían y también nos muestran la vigorosa defensa que hacen de su independencia al acudir a Luis XVIII para reducir a sus comandantes a la posición de observadores sin opinión. Cuando el mando francés decide abandonar algunas de las plazas, la principal preocupación del Gobierno será la de asegurar su custodia, dada la falta de hombres y de armas, dado que escasean hasta las armas blancas.

Aunque los liberales eran los enemigos del régimen, los partidarios de don Carlos les causaban mayores preocupaciones en estos años. La noticia de sus actividades, la aparición de grupos armados son siempre noticias prioritarias en la consideración del Consejo. Más que su reacción sorprende el carácter de los medios de información de que dispone. Hay ocasión en la que el ministro de la Guerra es sorprendido por la noticia de una partida que sus destacamentos no le han señalado. Las anécdotas son expresivas y por ello las recuerdo, pero las actas contienen muchas otras noticias, y sólo el interés particular de cada investigador podrá extraer de ellas toda la información que contienen. Lo que es único en ellas es el carácter directo de las

manifestaciones que en Consejo se hacían, y aun más allá, la posibilidad de contemplar la gestión política no desde nuestra perspectiva, que nos permite saber el alcance real de los sucesos, sino cuando las noticias encerraban un enorme margen de indeterminación. El lector no especialista disfrutará de un texto en el que, como en un caleidoscopio, las imágenes cambian con cada movimiento de la mano. Cuando la publicación se complete será el momento de revisar a fondo determinados capítulos de nuestra historia contemporánea.

Miguel Artola

PETER WALDMANN: *Ethnischer Radikalismus. Ursachen und Folgen gewalt-samer Minderheitenkonflikte am Beispiel des Baskenlandes, Nordirlands und Québecs* (= El radicalismo étnico. Causas y consecuencias de los conflictos violentos de minorías mediante los ejemplos del País Vasco, de Irlanda del Norte y Québec), Opladen, Westdeutscher Verlag, 1989; 437 págs.

Se trata de una obra sistemática y muy rica en detalles, que engloba más de diez años de investigación en torno a la violencia política por parte del autor. Peter Waldmann es conocido en el ámbito de habla castellana por sus obras sobre el peronismo, la transición a la democracia en la Argentina y los conflictos vinculados a la violencia política en el País Vasco. En este su último libro rastrea metódicamente una serie de hipótesis centrales (págs. 29 y sigs.), basándose en el análisis de los casos vasco, irlandés del norte y franco-canadiense (Québec), con abundantes referencias a dos ejemplos adicionales, que son: Cataluña y el Líbano. Waldmann considera que el comienzo de estos conflictos étnicos radica en el potencial de protesta acumulado por los agravios sufridos por grupos de los estratos medios, especialmente intelectuales y profesionales, cuyo *status* entra en peligro a causa de los procesos de modernización. El conflicto alcanza el umbral de la violencia si las capas inferiores se suman a la protesta y si el control y la dirección de la misma pasa de las capas medias a los estratos inferiores. La violencia practicada por los estratos medios tiende a ser una forma encubierta de ascenso social, por lo cual no desarrolla generalmente padrones de violencia manifiesta, sino más bien simbólica. La violencia originada en las capas interiores tiene que ver muchas veces con la defensa de un patrimonio y territorio considerados como esenciales e irrenunciables; adopta entonces el carácter de una violencia inmediata. Según Waldmann, la predisposición a la violencia política manifiesta es particularmente clara si las tensiones étnicas y las sociales coinciden:

el enemigo étnico se transforma en el llamado enemigo de clase. Esto sucede, por ejemplo, si la burguesía de la minoría étnica hace causa común con el Estado central —o con los intereses asociados a éste—, que oprime a la minoría étnica en cuestión. Si la burguesía regional-étnica toma como propias las reivindicaciones de su etnia, se produce una neutralización del conflicto a causa de una sobreposición de los intereses contendientes. De acuerdo a Waldmann, la protesta violenta de las minorías presupone que el sistema político como totalidad sufre una severa crisis de legitimidad: la minoría étnica pierde toda confianza en la legitimidad histórico-institucional del Estado central, entre otras cosas porque éste no parece tener ninguna capacidad de satisfacer sus demandas socioeconómicas y porque la etnia se convence de que un Estado propio podría ser altamente ventajoso para sus necesidades y posibilidades de desarrollo integral. En tal caso, la minoría deja de prestar obediencia a las autoridades que representan al poder central y crea sus propias ideologías (e utopías) programáticas. Este decurso es favorecido por el hecho de que muchos de estos grupos étnicos tienen concepciones premodernas sobre la conformación social (las categorías y los modelos de colaboración grupal, auto-ayuda y cohesión comunal provienen de una sociedad parcialmente preindustrial), las que propugnan una lealtad sólo parcial al Estado (la delegación de competencias y de soberanía al Estado central habría sido sólo de manera provisoria, fragmentaria y con muchas reservas). Si a todo esto se une un desempeño mediocre del Estado central en los campos de la economía y las prestaciones sociales, la legitimidad de aquél se diluye rápidamente ante los ojos siempre desconfiados de las etnias regionales (páginas 30, 270 y sigs.).

La violencia manifiesta estalla cuando se conjugan varias variables, entre las que se hallan el renacimiento de concepciones nacionalistas y regionalistas (págs. 76 y sig. y 80), la irrupción de un proceso de modernización (percibido generalmente como incompleto o insuficiente), la discrepancia entre el desarrollo socioeconómico y el político-institucional (pág. 77) y la separación entre las formas de protesta política, propiciadas por la clase media de aquellas favorecidas por los estratos bajos (págs. 78 y sig., 166 y sigs. y 269). Uno de los méritos centrales del libro de Waldmann consiste en haber hecho resaltar, basado en un material teórico y empírico muy amplio, la diferencia básica entre ambos tipos de violencia. Aquella ligada a las capas inferiores tiene mucho que ver con el llamado principio territorial (págs. 207 y 213); no en vano varios analistas, entre ellos Eric Hobsbawm, han llamado la atención sobre el hecho de que el nacionalismo de ciertos grupos puede ser interpretado como una reacción de temor ante la inminente destrucción de estructuras desarrolladas orgánicamente durante largos períodos históricos,

estructuras que conforman la identidad primaria de una etnia. La destrucción está enmarcada en un proceso de modernización proveniente de un área socio-cultural percibida como enemiga (o, por lo menos, como amenazante a la propia identidad). La defensa del territorio propio, escaso en extensión y considerado como medio sagrado, toma entonces la forma de una lucha sin cuartel. Waldmann ha subrayado igualmente la tendencia de los estratos inferiores a un uso generoso de la violencia porque disponen en el fondo de pocos recursos (entre los que se cuentan los intelectuales y retóricos); la violencia física inmediata aparece como el recurso de un grupo social carente de otros. Otro de los logros del libro de Waldmann es el de haber comparado estas variables con un material minuciosamente compilado (relativo al País Vasco y ETA, págs. 116-136, 183-187, 192 y sigs., 228-235, 241-248, 270-275 y 290-299). El autor llega a la conclusión de que es imposible atribuir racionalidad o irracionalidad a largo plazo a los actores socio-políticos violentos en base a un frío cálculo instrumental de costes y beneficios (págs. 32 y sig.). Todo análisis de causas (que muestra aquí sus limitaciones) debe ir acompañado de un examen de las consecuencias de la violencia prolongada para la sociedad en cuestión (examen descuidado por las ciencias sociales y políticas): la autonomización del comportamiento violento y de la cultura política correspondiente, la probabilidad de que a la larga no haya un claro vencedor, la caída en la calidad de la vida en las sociedades sometidas a la violencia continua y la consolidación de comportamientos anómicos en medio de la descomposición moral. La violencia prolongada crea, empero, también efectos de otro tipo, como ser, en algunos casos, la consolidación de lazos primarios (familia, amigos, vecindad) y el reforzamiento de cierto tipo de autoridades tradicionales. En los casos estudiados por Waldmann se puede constatar una consolidación de vínculos familiares y de nexos primarios como consecuencia de un estado permanente de guerra civil (págs. 334, 337, 339 y sigs. y 355 y sigs.). Waldmann ha esbozado también una serie de recomendaciones para reducir o mitigar la violencia política manifiesta, entre las que sobresale el postulado de fortalecer las instituciones y la autoconfianza de la etnia amenazada (pág. 367).

H. C. F. Mansilla

ALAIN TOURAINE: *América Latina. Política y sociedad*, Madrid, Espasa-Calpe, 1989; 516 págs.

El americanismo español, de tan serondos frutos en el período virreinal o novohispano, no ha roturado con igual intensidad su parcela contemporánea. Algunos de los escasos trabajos que merecen citarse acerca de dicho período no bastan para dejar de lamentar una ausencia muy significativa y elocuente. Desde hace algunos años son los propios historiadores suramericanos los que se esfuerzan en cubrir un vacío tan pesoso. En su ayuda han venido estudiosos extranjeros, fundamentalmente estadounidenses y galos.

En el elenco de estos últimos resalta la contribución del destacado sociólogo parisiense Alain Touraine. Su denso libro, espléndidamente vertido al castellano por uno de los mejores traductores españoles de la hora presente, Mauro Armiño, recalca esencialmente en el análisis de los aspectos más «externos» del hervoroso continente, en los que también, por supuesto, una mirada buida como la del autor de *La sociedad postindustrial* puede recoger alguna de las claves del desenvolvimiento iberoamericano en su pasado más reciente.

Si es difícil, y hasta cierto punto arbitrario, abocetar una caracterización general para las sociedades occidentales y del bloque de las democracias populares, raya casi en lo imposible trazar un cuadro de conjunto sobre comunidades tan diversas y contrastadas como las del Tercer Mundo, del que tan importante porción forma la América hispanolusitana. El común denominador, el subdesarrollo, adelanta algunos de sus rasgos dominantes, pero ello no exime de entrar en el terreno de las matizaciones y especificidades, muy abultadas en múltiples ocasiones.

Conforme es sabido, dos teorías se disputan en el día el diagnóstico exacto del fenómeno del subdesarrollo. Para los doctrinarios socialistas, éste no es más que la consecuencia obligada del capitalismo basado y mantenido en la explotación más descarada de los *having not*. Según los ideólogos contrarios, no pasa de ser un estadio forzoso en el proceso económico-social, que conduce a la industrialización y al desarrollo. Posiciones, como se ve, opuestas *per diametrum*, y entre las que es imposible encontrar alguna conciliación o acomodo. La realidad ha demostrado, empero, no dejarse ahorrar tan fácilmente por la teoría, con situaciones que no se ajustan por completo a ninguna de las tesis indicadas. Tanto en Africa como en Iberoamérica se ha asistido a la implantación de modelos heterodoxos, acuñados en ocasiones a la luz de frustraciones y fracasos en la búsqueda de soluciones liberadoras

y eficaces. El subdesarrollo de la Cuba de Castro no puede decirse que sea el corolario ineluctable del régimen capitalista ni que el boliviano o el zaireño responda a la miopía de sus dirigentes por encontrar la vía expedita hacia el capitalismo...

En definitiva, si las tesis indicadas en primer lugar son al menos parcialmente rebatibles, las segundas lo son en igual medida. Realizar simultáneamente la revolución agrícola, la revolución industrial y el desarrollo sin capitales ni cuadros en naciones por lo común superpobladas frisa casi en lo quimérico. Hasta el momento, pese a la existencia de ejemplos positivos, no cabe decir que las experiencias sean positivas, aunque no se trate, desde luego, de la cuadratura del círculo y haya más de un motivo para la esperanza. El capital humano traducido en la formación de sus gentes y en el patriotismo de sus núcleos dirigentes decidirán gran parte del éxito del crucial envite. Frente a los «países ricos», en ostensible caída demográfica, todos los de Iberoamérica son jóvenes y abiertos, por ende, al futuro y a la esperanza.

Conforme a estadísticas de la UNESCO, eran 889 los millones de analfabetos, de edades superiores a los quince años, existentes en el mundo en 1985. Seiscientos sesenta y seis millones de ellos vivían en Asia, en tanto que en Africa, más de la mitad de su población adulta era por entonces analfabeta. En Iberoamérica, el panorama no era más reconfortante, aunque sin alcanzar las cifras aterradoras de los otros dos continentes. Este terrible mal es, pues, la columna más poderosa e inamovible del subdesarrollo, alzándose como un insuperable obstáculo en la promoción de los pueblos incursos en él, de los que constituye quizá su principal seña de identidad y lazo unificador.

La pobreza y escasez materiales destacan como una nota peraltada en todos los países del Tercer Mundo; mas su gradación recorre una amplia escala, que va desde la subalimentación crónica de extensos territorios africanos hasta pueblos como el argentino o venezolano, donde la media de 2.500 calorías diarias por habitante —bien que en ciertas zonas del globo este promedio se rebaje a 2.000— es alcanzada por la gran mayoría de la población. De las cien mil personas que mueren de hambre diariamente en nuestro planeta, el mayor porcentaje se registra también en el continente negro, donde en 1988 moría una mujer de cada 21 como consecuencia de un embarazo o un parto, frente a Estados Unidos, en los que una mujer de cada 6.366 fallecía a consecuencia de la gestación. Con el equipamiento social —escuelas, dispensarios, carreteras, etc.— afrontamos un panorama tachonado de diferencias por encima del elemento unificador de su escaso desarrollo en todas las naciones integrantes del bloque analizado. Entre el analfabetismo de Guinea Bisseau y el de Chile, la distancia es tan considerable como la

existente entre la mortalidad infantil de Yemen del Sur y la uruguayana. Y si la deuda externa se ofrece también como otro de los puntos unificadores en su fisonomía, no puede ocultarse las abismales distancias que separan a Perú de Egipto o a Túnez de Brasil. Y si igualmente es otra de sus constantes las grandes inversiones militares, no es tampoco menor que en los otros terrenos antecitados el contraste entre los gastos de Marruecos o Pakistán y los de Costa Rica y Paraguay.

Dados sus niveles educativos y la exaltación nacionalista predominante en casi todos ellos, el absorbente peso del Ejército conforma buena parte de la unidad social de los países aludidos. En numerosas ocasiones, las Fuerzas Armadas han sido cantera de cuadros y gobernantes. Las guerras que envolvieron el nacimiento de muchas naciones otorgaron a sus jefes el rango de conductores natos e indiscutidos —piénsese, por ejemplo, en el caso del *Fondateur President*, el antiguo sargento y periodista general Mobutu—. Cuando ello no fue así, la formación de las élites castrenses en países occidentales —Norteamérica, Francia, Gran Bretaña, Rusia— les proporcionó unos saberes y una experiencia administrativa y organizadora de la que estaban horas unas poblaciones cuyos universitarios y técnicos han sido hasta el presente muy reducidos.

Aun en Estados de factura formal democrática y tradición civilista, como Filipinas o Colombia, el papel de los Ejércitos es decisivo y fundamental en la gobernación del país. El liderazgo carismático convertido en otra nota vertebradora de las sociedades tercermundistas se enraiza y nutre, en la mayor parte de las ocasiones, en el fenómeno anterior. El caudillismo suramericano proveniente de los tiempos de la Emancipación se perpetúa en la Iberoamérica actual, a veces bajo ropaje civilista. El caso del general Perón y del movimiento creado por su poderosa personalidad así lo demuestra. La marginación de la vida pública, que se opera de hecho en casi todos estos países, condena a sus habitantes a un catacumbismo político, que impide el rompimiento de la situación de bloqueo a la que su infra o subdesarrollo cultural le aboca.

El caudillismo como instancia suprema de legitimación político-social conecta directamente con la existencia de otra institución elevada a la categoría de nota definitoria de una amplia porción de las sociedades aludidas. En sus diversas modalidades, el caciquismo se adentra profundamente en el tejido social de tales pueblos, en especial, en los de Iberoamérica. Algunas veces se nucleará en torno a un individuo en posesión de los hilos que mueven las palancas del poder local o nacional; otras, será un grupo o familia el eje sobre el que se mueva toda una comunidad a escala municipal o regional y aun superior, y, en fin, las mismas instituciones y partidos ejercen las fun-

ciones caciquiles, tal y como ha ocurrido hasta nuestros mismos días con el famoso PRI mexicano.

Convertido en poderoso elemento deseducador por su raíz antiética, el caciquismo fomenta en grado sobresaliente la generalizada corrupción que distingue a la práctica totalidad de estas sociedades, con una burocracia transformada en clientela del poder y unas elites degradadas o con escaso vigor para el cambio. El sucursalismo y satelización económica de los pueblos del Nuevo Mundo acentúa la inmoralidad de sus clases dirigentes, dependientes de organizaciones multinacionales que operan en sus territorios con poca o nula preocupación por la promoción de esta «periferia» del capitalismo central.

Frente a esta desarticulación, los partidos políticos comienzan a desempeñar un papel casi insustituible de estructuración de la sociedad, al movilizar las masas, seleccionar las elites y difundir las ideologías. Sin duda, en muchas naciones afroasiáticas tales formaciones son artificiales, salidas de los grupos y organizaciones que impulsaron la independencia, sin que hayan nacido del clima de modernización necesario para una vida parlamentaria auténtica. Mas, con todo, a través de su actividad fomentan decisivamente la atmósfera indispensable para la creación de una patria y una conciencia nacional por encima de clanes y tribalismos, de jerarquías periclitadas o en vías de extinción y de injerencias religiosas, aunque, en ocasiones, el proceso no aparezca nítido, confundiendo en él las aguas.

La «revolución» femenina, que ha alcanzado su madurez en las sociedades industrializadas, apenas si se atisba en las ahora glosadas. El analfabetismo, característico de la mayoría de los pueblos del Tercer Mundo, flagela con mayor fuerza a la mujer suramericana, sometida a un régimen que recuerda a veces la servidumbre, con agotadoras tareas domésticas y laborales. Su acceso a los centros superiores de enseñanza es muy restringido, así como su inserción en los puestos de mando y dirección.

En términos globales, las sociedades del Nuevo Mundo presentan una gran inestabilidad, pese a la presencia en ellas de fuertes vínculos familiares o corporativos. Su constreñimiento político e ideológico y su precario nivel de vida hace de la mayor parte de ellos un potencial altamente explosivo frente a coyunturas críticas, al tiempo que las convierte en caldo de cultivo para toda clase de mesianismos, sin que sus energías fecunden, por la obstrucción de los poderes establecidos, los caminos que puedan conducirla a su desarrollo y democratización, íntimamente ligados.

Potenciar todo lo que conduzca a esto último deberá erigirse en meta prioritaria para los dirigentes políticos y sociales de Iberoamérica, tierra aún de promisión más que de realidades positivas en su convivencia y nivel de

vida. Entre los muchos mensajes que es posible extraer de este libro sereno, pero a la vez denunciador, quizá sea éste el más peraltado y apremiante.

José Manuel Cuenca Toribio

J. K. GALBRAITH y S. MENSNIKOV: *Capitalismo, comunismo y coexistencia. De un pasado amargo a un futuro mejor*, Barcelona, Planeta, 1989.

Muy adentrado 1987, dos grandes economistas dialogaron *coram populo* respecto a la situación del sistema productivo norteamericano y soviético como símbolos del mundo capitalista y de las democracias populares; y enhebraron al hilo de su extensa conversación el cañamazo de otras muchas cuestiones en torno a la historia y a la política del más reciente pasado.

La primera es quizá la temática más extensamente abordada por Galbraith, cuya exposición traza toda una enjundiosa y sintética panorámica de la evolución económica de su país. A un Occidente deshecho tras la Segunda Guerra Mundial, la salvación provendrá en gran parte del más joven de los imperios. La contienda ha sancionado al liderazgo indiscutible de los Estados Unidos, que ya no podrán desprenderse, como al término de la primera conflagración, del peso de la púrpura.

La etapa reconstructora, que imprime un aliento considerable a la mayor parte de los países del que desde ahora comenzará a denominarse «mundo libre» será corta. Al depender aquéllos de manera cada vez más estrecha de la evolución de la economía norteamericana, la recesión que afecta a ésta a fines de los años cuarenta impactará a todas las naciones occidentales.

Sin embargo, y como otras veces ha sucedido, una guerra localizada provocará la reactivación. El conflicto coreano dejará de sentir inmediatamente sus efectos beneficiosos sobre la industria norteamericana; prolongándose su onda a un Japón que se ha adentrado ya por las «vías del milagro nipón»; camino seguido de igual manera por la naciente República de Bonn y, en menor escala, el Reino Unido y Francia. En la fecha indicada, el producto nacional estadounidense representaba el 60 por 100 de todo el bloque de países de la OCDE y su productividad venía a ser dos o tres veces superior.

Bajo su égida, y a partir de entonces, la economía occidental conocerá una etapa de crecimiento sostenido que inflexionará gravemente un veintenio más tarde con la crisis provocada en su sistema productivo por el aumento espectacular del precio del petróleo. Por muchas razones, este cuarto de siglo será considerado como la fase de mayor prosperidad conocida en la historia de los países más evolucionados del mundo. Su beneficiosa influencia llegará

a las naciones en vías de desarrollo, algunas de las cuales, como, por ejemplo, España, se convertirán en su transcurso en una potencia industrial estimable. La producción agrícola mundial se acrecentará en más de un 50 por 100, al paso que se triplica la industrial, teniendo en ello un especial protagonismo Occidente.

Aunque el Estado ejercerá un papel destacado en dicha expansión, será la iniciativa privada, a través de grandes compañías y empresas, la que actúe como motor de la economía del mencionado período. El que se ha calificado de «capitalismo expansivo», enquistado en organismos multinacionales que controlan todas las fases de producción y distribución de determinados productos, será el gran protagonista de la época. Norteamérica, que hará descansar todo su liderazgo sobre una valuta económica indiscutida, el dólar, será también la tierra por excelencia de las empresas multinacionales. Alrededor de medio millar tienen en su manos el 60 por 100 del PIB. Estas sociedades gigantes se convertirán en auténticos imperios económicos, con una influencia social y política a veces decisiva, incluso en sociedades muy desarrolladas y en países de hábitos democráticos arraigados. Millares de gentes y regiones enteras dependerán de sus dictados y orientaciones, así como el mismo progreso tecnológico, que encuentra en sus laboratorios su punta de vanguardia.

Las macrosociedades, así como otros organismos de entidad estatal, demuestran palmariamente cómo la ciencia y la tecnología se encuentran hoy en la raíz misma del crecimiento económico. La automatización y la cibernética pueden exhibirse como su conciliación y expresión más fecundas. Merced a ellas se ha logrado, en campos muy diversos, un sorprendente ahorro de energías y un formidable dominio informático, que queda de manifiesto el ancho horizonte de progreso que el hombre tiene todavía ante sí.

Dadas las variables de todo tipo y la elevada cantidad de factores que intervienen en la actividad de estas macroempresas, es lógico que se haya impuesto en su organización y en la del conjunto del sistema capitalista la planificación tan insistentemente reclamada por Keynes (1888-1946). El estudio del mercado es, obviamente, su principal preocupación junto con el de las inversiones y los gastos productivos, huyéndose a todo trance de la competencia salvaje, característica del capitalismo de épocas precedentes. De ahí que el Estado desempeñe un papel esencial en todo el diseño como cliente y proveedor de créditos y facilidades fiscales, hasta el extremo de resultar cada vez más difícil diferenciar sus respectivas esferas. Las relaciones entre la Administración y la gran empresa devienen cada día mayores, dándose de hecho, en múltiples ocasiones, una nacionalización al lado, en otras, de una invasión tentacular de los aparatos del poder político, que llega final-

mente a desembocar en la mayoría de las veces en una interrelación completa entre ambos. Sin los pedidos y créditos de los gobiernos, las multinacionales y demás empresas gigantes no podrían, en muchas coyunturas, asegurar su rentabilidad, y a la vez, sin su eficaz funcionamiento, la maquinaria estatal chirriaría. Norteamérica y el Japón se presentan como acabados modelos de ello, pero también todos los restantes países desarrollados dibujan un panorama semejante, según lo ilustra la República Federal Alemana.

UN CAPITALISMO RENOVADO

Frente al impacto y asimismo el desafío que a sus estructuras significara la crisis iniciada con la estanflación del bienio 1970-71 —coexistencia de elevadas tasas inflacionistas con la recesión de las actividades productivas— y coronada a finales de 1973 —octubre— con la guerra del Yom Kippur, el sistema capitalista demostraría una vez más su sorprendente capacidad de asimilación y recuperación. Antes, empero, de volver a situarse en un horizonte de seguridad y esperanza, sus cimientos se cimbrearon con fuerza por algún tiempo. El término de la década estuvo envuelto en Estados Unidos en un panorama que en ocasiones bordeó una coyuntura crítica, con altas cotas de inflación, desempleo y déficit exterior, por las desventajas de sus productos con respecto al mercado internacional.

Pero la era del capitalismo no constituía ya un capítulo de la historia, ni menos aún se produjo su reemplazo por un modelo socialista, completamente desencuadrado. De manera sorprendente, su recuperación provendría de un retorno a los orígenes...

Justamente cuando la crisis semejava arreciar y convertirse en auténtico huracán comenzó a perfilarse en el horizonte la llamada «revolución conservadora». Presidido por un thatcherismo que se afanaba por infundir confianza a las recetas clásicas del capitalismo —apoyo a la iniciativa privada, reducción de gastos estatales, aminoración de impuestos—, el reaganismo desenvolvería idénticos postulados en EE. UU. Malparada su estrategia inicial, consistente en la aplicación de una estricta restricción monetaria, contención del gasto público y racionalización de sus estructuras, la primera ministra inglesa decretaría el trasvase a manos privadas del extenso e importante sector empresarial público. La sencilla receta hizo milagros. El saneamiento del presupuesto estatal debido a la supresión de fondos destinados a empresas deficitarias y el aumento consiguiente de la recaudación fiscal fue la principal consecuencia para una economía que vio cómo la participación del gasto público en el PIB se redujo drásticamente, de igual manera que los impuestos

sobre la renta de las personas físicas y de sociedades. El déficit oficial desaparecería con los ingresos generados por las ventas de las empresas públicas —2,2 por 100 del PNB en 1982, un punto menos que en 1980—, seguido de un descenso espectacular de la inflación —5,4 por 100 en 1982—. La resistencia al programa conservador protagonizada por los Trade Unions —huelga de la minería durante más de un año— sería quebrada por la tenacidad de la «Dama de hierro».

Por su parte, la *reagonomics* se basó en idéntica fórmula, al otorgar ilimitada confianza a la libre competencia como guía del mercado y caracterizándose su praxis por la reforma y reducción del fisco. Los Estados Unidos se esforzarían ahora por ser fiel al sueño americano, identificado con un radical individualismo y un sistema productivo basado en la competencia y en las leyes y mecanismos de mercado, reguladoras automáticas de conflictos y crisis.

La fórmula cuajó y un capitalismo platónico y ufano hizo retornar para Occidente los mejores años de las décadas centrales del novecientos. Este capitalismo triunfante arrasó cuanto se opuso a su paso, como lo ilustra la Francia de los primeros años del mitterandismo. Los ardientes deseos de los socialistas galos por hallar planteamientos que redujeran el peso de los poderes del dinero en aras de una más justa distribución de las riquezas acabaron en una completa palinodia poco tiempo después de haberse decretado la nacionalización de las principales empresas y de las instituciones bancarias.

Incluso en el área más suscitadora de problemas e inquietudes, la monetaria, se había llegado a un cierto consenso en la casi imposibilidad de encontrar fórmulas que asegurasen el equilibrio deseado con tipos de cambio fijos. Después de una década como la de los setenta, presidida por el signo de la inflación y singularizada principalmente con la crisis monetaria, se llegaría, a comienzos de la siguiente, a aceptar como mal menor soluciones coyunturales. Estas, según es obvio, no podían aspirar a reencontrar los caminos de la perdida normalidad, y sólo se exigía de ellas que no agravasen la precariedad del sistema monetario internacional, que haría de la necesidad virtud, al convertir la flexibilidad en su método más practicado. El negro horizonte de la deuda externa, sin visos de remedios eficaces y definitivos; las notables oscilaciones del dólar y el papel sustitutorio ejercido a veces por la banca como fuente de financiación internacional seguirían dibujando, no obstante, en este último decenio un cuadro poco alentador para concebir esperanzas de un nuevo orden monetario con los mismos caracteres de solidez que los vertebrados por el patrón oro o por el dólar de los días gloriosos de Bretton Woods.

Con todo, ésta sirvió principalmente para mostrar cómo algo esencial había cambiado en el tejido del capitalismo con relación a los años de incontestable predominio yanqui.

La CEE y muy especialmente Japón reclamaron a partir de entonces una dirección más colegiada de la economía y un mayor cumplimiento por parte de EE. UU. de sus enormes responsabilidades cara al buen funcionamiento del capitalismo. A la fecha, debido a su completa e indelegable independencia del avance tecnológico —de enorme costes—, el capitalismo requiere una ampliación de mercados capaz de absorber producciones en masa, hecho que implica a su vez una creciente importancia de las inversiones fijas en las empresas, lo que hace imprescindible una planificación —pública o privada— que aleje al sistema de sus modelos manchesterianos de la competencia a todo evento. El cambio ha llegado también a él, y hasta el momento ha sabido adaptarse. De cosmética acusan sus adversarios la innovación introducida por el «neocapitalismo». El término alude al intento del viejo sistema de acercarse más al ciudadano de a pie, atenuando el concepto de una estructura productiva, jurídica y política para inscribirse más en el hondón de la vida social; con un equilibrio más armonioso entre valores materiales y prácticos y valores morales y espirituales. Más profunda tal vez, en efecto, que dicha «reconversión» haya sido la llevada a cabo, especialmente, en los países anglosajones por el «capitalismo popular» de los años ochenta, con la creciente incorporación al accionariado de empresas y negocios importantes de sectores de las clases medias, destiñendo así el tono oligárquico del sistema. En fin, sean cuales fueren los juicios que nos merezcan estas metamorfosis o verdaderos cambios, lo cierto es que el capitalismo sigue generando riqueza, muy desigualmente repartida, pero de la que ningún sector de las naciones occidentales deja de beneficiarse. La evolución de la postrera década es, por el momento, su última demostración. Desde 1982, los países ricos entraron en un ciclo de crecimiento sostenido, cuya prolongación no aparece demasiado amenazada para los años venideros.

EL DESENVOLVIMIENTO DE LA ECONOMIA DE LAS DEMOCRACIAS POPULARES

En los planteamientos del economista ruso, la apelación historicista es menor, aunque, naturalmente, no faltan en sus formulaciones la referencia al momento en que fue construido su modelo económico.

En el llamado Bloque oriental, o países de democracia orgánica, su eco-

nomía ha presentado hasta casi las fronteras de nuestros días una fisonomía opuesta a la capitalista. Suprimido el incentivo del beneficio, así como la existencia del mercado libre, ha estado hormada en un dirigismo a ultranza. Es o ha sido el Estado el absorbente agente de todo el proceso económico, estableciendo un rígido ordenamiento en las diferentes ramas de la producción, a las que se les ha asignado unos niveles no siempre alcanzados. La planificación se ha convertido así en el instrumento esencial de estas economías. Dueño de todas las industrias de base, y sin las preocupaciones derivadas de un mercado concurrencial, el Gobierno delinea la vida económica al margen de elementos coyunturales y siempre en función de sus intereses de estrategia mundial, sin dedicar una atención especial a su incidencia en la opinión pública. Empero, a despecho de contrastes y diferencias, el funcionamiento de la economía de los dos bloques no es muy antagónico. Ambos descansan fundamentalmente en el protagonismo indisputado de la gran empresa, convertida en el verdadero motor de la actividad productiva.

En los primeros momentos, es decir, en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la reanudación de los planes quinquenales en Rusia y las medidas de reactivación adoptadas en todos los países de la Europa oriental, bajo su égida, alcanzaron sus objetivos primordiales. Igual sucedería en la primera fase de la China Popular, con unos planes quinquenales que sacaron al gigantesco país de la hondonera en que lo habían sumido la ocupación japonesa y una guerra civil prolongada a lo largo de casi dos decenios. Sin embargo, pasada esta fase, el ritmo del progreso disminuyó considerablemente e incluso se llegaría en algunos sectores a crisis endémicas o a situaciones de auténtico bloqueo y callejones sin salida.

Tal fue el caso de la agricultura de los dos colosos comunistas. La economía soviética tendría en el sector primario su principal talón de Aquiles, en correlato estrecho con la situación china. La galopante demografía de ambos países, muy en particular del segundo, revestiría a la crisis agraria de unos caracteres dramáticos, paliados en algunas ocasiones, en el caso ruso, por importaciones de cereal, casi siempre de naciones occidentales; sin que del lado chino pudiera nunca acudir a este remedio por la rigidez autárquica de su modelo económico, así como por su absoluta carencia de divisas.

Como decíamos anteriormente, otros temas comparecen en las densas páginas de una obra cuya atenta lectura deparará en gran número enseñanzas y sugerencias de elevado interés. En la actualidad, el libro tiene ya en algunos aspectos una luz casi prehistórica; pero aun así, es provechoso para encuadrar con justeza las causas inmediatas que provocaron el hundimiento de toda una arquitectura material e ideológica. El capitalismo no pone, empero, como quieren sus entusiastas, una omega a la historia. Pese a su indudable

RECENSIONES

capacidad de autocorrección y a sus grandes logros, la necesidad de alternativas y opciones válidas, no necesariamente rupturistas y nacidas fuera de su ámbito, son y serán necesarias para un desarrollo económico que tenga como fin primordial la creación de riqueza y su justa distribución.

José Manuel Cuenca Toribio